

Noviembre de 2023

Oficina de Representación en España y Portugal

Reelección del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Dr. Ludger Gruber, Martin Friedek

Pedro Sánchez (PSOE) ha sido reelegido Presidente del Gobierno español con la ayuda de los partidos separatistas de Cataluña y el País Vasco. Está imponiendo un alto precio a España por su decisión. El país está más dividido que nunca. La relativamente joven democracia corre peligro de verse comprometida.



El jueves 16 de noviembre de 2023, el presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez (PSOE), fue reelegido presidente del Gobierno español con 179 de 350 votos. Además del apoyo del partido socialista PSOE (121 mandatos), contó con los votos de la plataforma electoral populista de extrema izquierda Sumar (31 mandatos); el partido separatista republicano catalán ERC (7 mandatos); el partido separatista étnico-nacionalista Junts per Catalunya (JxC, 7 mandatos); la extrema izquierda vasca EH Bildu (organización sucesora del brazo político de la antigua banda terrorista ETA llamada "Batasuna"; 6 mandatos); los nacionalistas vascos PNV (5 mandatos); el bloque nacionalista gallego BNG (1 mandato) y la coalición canaria CCa (1 mandato).

Ninguna formación de gobierno desde la aprobación de la conciliadora Constitución democrática de 1978, tras el fin de la dictadura franquista, ha polarizado tanto a España como la actual. Las protestas contra la formación de este Gobierno y, sobre todo, contra la amnistía prevista para todos los implicados en la sublevación de 2017 en Cataluña llevan semanas creciendo. Cientos de miles de ciudadanos indignados volvieron a concentrarse en Madrid este fin de semana, después de que 2,5 millones de personas se manifestaran en

toda España el pasado fin de semana. A las manifestaciones diarias frente a la sede del partido PSOE en la calle Ferraz, que hasta ahora han sido iniciadas y mantenidas vivas principalmente por ciudadanos decepcionados, se han sumado también fuerzas radicales (de derechas). Esto no oculta el hecho de que está protestando una amplia mayoría social, que se extiende mucho más allá de los simpatizantes de los partidos de la oposición, el partido de centro-derecha Partido Popular (PP) y el partido populista de derechas Vox.

Los grupos profesionales y sociales que protestan representan a cientos de instituciones públicas, organizaciones, asociaciones e incluso sindicatos. Una selección: las cuatro grandes asociaciones de jueces españolas, políticamente independientes pero que reflejan afinidades políticas diferentes; el Consejo General del Poder Judicial español; la Asociación Mayoritaria de Fiscales (AF); la Confederación Española de Empresarios; la International Bar Association (IBA); cientos de catedráticos de derecho constitucional y ciencia política de diferentes cosmovisiones políticas que firmaron declaraciones públicas. Desde el ámbito político, algunos conocidos antiguos - y algunos valientes actuales- dirigentes del PSOE, como el presidente regional de Castilla-La Mancha, Emilio García Page, o el ex presidente del Gobierno Felipe González, uno de los artífices de la España democrática posterior a 1975, se oponen a los acuerdos. Además, alrededor del 50% de los votantes del PSOE (unos 3,9 millones) están en contra de la amnistía en los sondeos de opinión, al igual que, por supuesto, los aproximadamente 8 millones de votantes del Partido Popular y los 3 millones de Vox.

Antecedentes

Los observadores extranjeros con simpatía por España están perplejos. Los acontecimientos actuales no encajan con la narrativa generalizada de que el presidente socialista Sánchez, junto con el partido de extrema izquierda Podemos, supuestamente sacó bien a España de la crisis del coronavirus durante la última legislatura (2020-2023) en una llamada "coalición de progresistas", consolidó la economía de España y, sobre todo, logró hitos sociopolíticos para más justicia, igualdad y oportunidades. Importantes concesiones a los separatistas en la anterior legislatura, como la modificación grupal de la ley penal (supresión de la sedición y minimización de la ley de malversación), fueron elogiadas por Pedro Sánchez como acciones clarividentes para contribuir así según él a la "pacificación" del conflicto territorial a través de la "desjudicialización" de un conflicto supuestamente político.

¿Por qué hay tanta gente que se resiste a la promesa de Pedro Sánchez de continuar con las políticas "progresistas", de trabajar en la "pacificación interna" de España y de evitar que España "recaiga en el pasado restaurador y oscuro de la derecha", incluso de construir "un muro", como dijo literalmente Sánchez en el debate parlamentario?

Una manzana de la discordia más concreta y actual son las concesiones que Sánchez otorgó a los partidos regionales que le apoyan sin ninguna contrapartida significativa. Los partidos gobernantes PSOE y el partido de extrema izquierda Podemos -que de hecho apenas sigue existiendo - sufrieron derrotas devastadoras en las elecciones regionales y locales de mayo de 2023, mientras que el PP ostenta ahora la jefatura del Gobierno en 12 de las 17 comunidades autónomas (CC.AA.). En respuesta, Pedro Sánchez convocó elecciones parlamentarias anticipadas, lo que fue visto como una mezcla de acto de desesperación y golpe de genialidad. En estas elecciones, el PSOE fue capaz de mantener su resultado de las elecciones nacionales anteriores, mientras que todas las demás fuerzas que votaron en el Congreso a favor de Pedro Sánchez han salido de las elecciones como perdedoras sin excepción. Esto es particularmente evidente en el caso de los separatistas catalanes. Su apoyo político ya había disminuido antes de las elecciones y ahora ha caído aún más, en algunos casos drásticamente. El porcentaje de voto a ERC, que actualmente gobierna en Cataluña, ha caído a la mitad. Los partidos separatistas ERC y Junts cayeron al tercer y cuarto puesto en Cataluña en las elecciones generales del 23J respecto a las de 2019, y el Partido Popular (PP), en quinto lugar, obtuvo 80.000 votos más que Junts, pero aun así obtuvo un

diputado menos debido a la ley electoral. Todos los partidos separatistas del País Vasco y Cataluña juntos recibieron sólo el 6% de los votos nacionales.

Estas cifras explican en gran medida el desconcierto que provoca el hecho de que una minoría tan pequeña esté determinando políticamente o incluso chantajeando a una mayoría dentro de Cataluña, por no hablar de todo el país. Como Pedro Sánchez ya rechazó categóricamente cualquier cooperación con el PP en la pasada legislatura y sigue haciéndolo en la actual, dependía y depende de cada voto de los partidos centristas. El partido Junts per Catalunya con su líder prófugo Carles Puigdemont, cuyos siete escaños ayudaron a Sánchez a lograr un salto decisivo sobre la mayoría absoluta de 176 escaños, es una punta particular de la balanza. Todos los partidos separatistas, pero Junts per Catalunya en particular, se caracterizaron por insistir en sus máximas exigencias en las negociaciones, mientras que el partido gobernante, el PSOE, no dio muestras de éxito por su parte en las negociaciones. Esto podría considerarse la norma en las negociaciones de coalición, pero fue el contenido material de las concesiones lo que causó gran preocupación e incertidumbre. Como resultado, se alcanzaron los llamados acuerdos ("pactos"). He aquí algunos hechos y detalles importantes:

- ✚ **JxC** está impulsando una **ley de amnistía** que previsiblemente concederá una amnistía general a todos los implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, investigados por sedición, malversación e incluso terrorismo. Sin embargo, esta opción no está contemplada actualmente en la Constitución española. Se discute si una amnistía general es compatible con la Constitución. En cualquier caso, una reforma de tal calado requeriría un amplio debate social y parlamentario, pero el grupo parlamentario del PSOE la está tramitando a toda prisa como ley de urgencia. Incluso en el caso de los indultos, la Constitución española establece que los indultados deben mostrar arrepentimiento de sus actos en el sentido de que no repetirán sus acciones rebeldes. Sin embargo, el mismo día de la investidura en el Parlamento, los principales portavoces de ERC y JxC dejaron inequívocamente claro que la amnistía sólo les proporcionaría la base y la munición para exigir referendos en ambas regiones con el fin de lograr la independencia definitiva de España, y que no renunciarían a ninguna de sus, en algunos casos inconstitucionales, máximas reivindicaciones.
- ✚ **ERC** obtuvo de Sánchez una primera **quita extraordinaria de la deuda** de Cataluña con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 15.000 millones de euros (aproximadamente el equivalente, por ejemplo, a un presupuesto anual de la Comunidad Autónoma de Galicia, que fue arbitrariamente condonado en un instante); el traspaso de la titularidad del **transporte ferroviario regional** a la Generalitat y la continuación de la **mesa de negociación** de la Generalitat con el Gobierno central, a la que ERC siempre intenta dar un sabor "bilateral".
- ✚ El **acuerdo Junts-PSOE** también prevé la posibilidad de utilizar el concepto de "**lawfare**" de Donald Trump para revisar las investigaciones y sentencias judiciales concluidas y en curso relativas a los separatistas en los ámbitos de sedición, malversación/corrupción y terrorismo por parte de los órganos parlamentarios, lo que equivaldría a un **daño masivo al principio del Estado de Derecho** de separación de poderes en España, el cuarto país más grande de la UE. Aunque el término "lawfare" no se incluye formalmente en el proyecto de ley que el PSOE presentó al Parlamento el 13 de noviembre, la extrema inestabilidad del Gobierno en minoría PSOE-Sumar y su dependencia de los votos de Junts significa que es probable que los separatistas sigan persiguiendo y exigiendo políticamente la aplicación de este concepto hostil al Estado de Derecho.
- ✚ **ERC y JxC** han anunciado que condicionarán todas y cada una de las aprobaciones legislativas de este frágil gobierno minoritario de PSOE y Sumar, que sólo tiene 154 de 350 mandatos, al "avance y grado de implementación" de sus máximas exigencias. JxC también consiguió una cláusula que transferirá la potestad de recaudar todos los

impuestos íntegramente al gobierno regional catalán, lo que significa que todos los **impuestos catalanes serán recaudados al 100% por Cataluña** y para Cataluña, dejando a la hacienda española con las manos vacías. Hay que tener en cuenta que Cataluña es la segunda región económica de España después de Madrid (PIB 2022: unos 270.000 millones de euros). Por último, Junts reclama la institucionalización formal del conflicto territorial regional mediante el **nombramiento de un mediador internacional** que dirija las negociaciones entre España y Cataluña para lograr, en última instancia, un referéndum de independencia.

- ✚ Concesiones (públicas) a otros partidos: Los acuerdos con el partido separatista y de extrema izquierda vasca **EH Bildu** no se han hecho públicos, pero el hecho de que el PSOE, cuyos políticos también fueron perseguidos por ETA en el País Vasco, esté ahora negociando abiertamente con EH Bildu debe considerarse ya como una ruptura histórica del tabú. Se da por hecho que EH Bildu podría haber exigido ayuda al PSOE para obtener la alcaldía de Pamplona (Navarra) y pactos de gobierno en el País Vasco (EH Bildu cada vez se expande más desde el País Vasco a la vecina Navarra). El líder de EH Bildu, Otegi, que fue condenado por pertenecer a la organización terrorista ETA, reclama también un referéndum de autodeterminación en el País Vasco, que considera como conseguido. En un discurso en el Sinn Féin, que pronunció tras concluir las negociaciones con el PSOE, dijo: "Tanto en **Irlanda** como en el **País Vasco**, han amanecido **buenos tiempos para los movimientos independentistas**".
- ✚ Los nacionalistas vascos del PNV arrancaron a Sánchez la promesa de obtener la **potestad de administrar la Seguridad Social** y el **reconocimiento del euskera en toda España**. El País Vasco es la quinta región económicamente más importante de España (71.700 millones de euros, 2021).
- ✚ Por un solo voto del bloque nacionalista gallego **BNG**, Sánchez prometió dar a Galicia los mismos **privilegios fiscales** que recibirá Cataluña. Galicia es, al fin y al cabo, la sexta región económica de España, con un PIB de unos 63.000 millones de euros (2021).
- ✚ Ninguno de los cuatro partidos nacionalistas-separatistas más importantes ha apoyado una sola reivindicación política que fuera en interés del conjunto de España. El Estado en su conjunto ha sido y está siendo utilizado como cantera en una medida sin precedentes. Además, todos los representantes de estos pequeños partidos articularon, sin ningún tipo de disimulo, que todas estas concesiones sólo eran vistas como un paso intermedio hacia la independencia real.
- ✚ A la vista del debate sobre la amnistía, algunas de las demandas de la extrema izquierda perjudiciales para la economía, como el **aumento de impuestos** y una **mayor redistribución de recursos** formuladas por el grupo Sumar sólo llegan en parte a la opinión pública.

Valoración política

La resistencia y la indignación de amplios sectores de la judicatura española, de las autoridades financieras, de las comunidades autónomas y de la población sólo pueden entenderse a la luz de esas demandas y declaraciones concretas.

Una amnistía como contribución a una solución política al conflicto territorial habría sido concebible si Sánchez hubiera buscado una amplia mayoría junto al PP y si los separatistas hubieran renunciado a su máxima exigencia de separación de España. Ni ha ocurrido ni ocurrirá. Es más, la ley de amnistía reinterpreta ahora de hecho la democracia española de 1978 como un Estado ilegítimo, desacredita a sus fuerzas de seguridad y convierte a los rebeldes contra la Constitución democrática en víctimas políticas. El posible nombramiento de comisiones políticas en el Parlamento para revisar el poder judicial daña su

independencia y lo somete a un mandato político (lawfare). Este peligro ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha provocado la actual resistencia masiva.

Casi se puede considerar una anécdota que Sánchez y algunos ministros clave ya habían comunicado la amnistía como inaceptable e incompatible con la Constitución antes de las elecciones. Esta es la razón por la que PP y VOX han acusado al giro de Sánchez de rozar el fraude electoral e incluso la corrupción política, ya que se habría comprado siete mandatos a cambio de torcer el Estado de Derecho. Calificar al líder de la oposición de "mal perdedor electoral" por haber señalado los peligros que corre el Estado de Derecho español, como han hecho algunos medios alemanes, no capta la relevancia de los hechos.

Según la valoración mayoritaria de los expertos, la condonación discriminatoria y arbitraria de la deuda catalana vulnera el principio de igualdad de las comunidades autónomas. Cataluña, País Vasco y Galicia suman el 29,8% de producto interior bruto de España (2021), por lo que resulta completamente utópico que el Gobierno pueda refinanciar semejantes pagos de transferencias a algunas de las zonas más ricas de España sin tener que imponer una presión fiscal aún mayor a las zonas ya de por sí más pobres, lo que es diametralmente opuesto a la idea de desarrollo social integral en el conjunto del país. Por el contrario, tendrá que compensar estos "regalos" con mayores ingresos fiscales en las regiones estructuralmente más débiles, lo que se traducirá en una falta de inversión necesaria en ellas, que probablemente agravará aún más la desigualdad social y territorial en España.

Con sus discursos excluyentes antes y sobre todo durante la sesión parlamentaria (Investidura), Sánchez ha contribuido significativamente a la polarización irreconciliable. Calificó literalmente a todos los que no compartían su concepto de "generosidad", "reconciliación" y "paz social" de "reaccionarios" y "extrema derecha" contra los que hay que levantar un "muro". Esta es otra de las razones por las que personas del centro moderado, como socialistas críticos, liberales y democristianos, que no suelen manifestarse, salen ahora a la calle con banderas españolas y europeas. El hecho de que los principales socialistas deslegitimen estas manifestaciones calificándolas de incitación está exacerbando los ánimos.

Perspectivas

Se especula sobre cuánto tiempo puede sobrevivir esta constelación política de gobierno, que no está unida por un proyecto político común positivo para el conjunto de España, sino sólo por la motivación negativa de impedir a toda costa un gobierno PP-VOX.

Esta coalición de perdedores electorales podría aguantar mucho tiempo, ya que la alternativa de nuevas elecciones se traduciría en un mayor debilitamiento de esta, como sugieren las primeras encuestas. Ninguno de los separatistas querrá renunciar a la "oportunidad de oro" que tienen actualmente, contando con un jefe de Gobierno que depende más que nunca de ellos y que les permite aplicar sus reivindicaciones máximas, mientras la supervivencia del gobernante en el poder dependa completamente de ellos.

La esperanza de los conservadores de que el Tribunal Constitucional pueda detener la ley de amnistía también parece prematura. El Tribunal Constitucional está formado actualmente por una mayoría de partidarios y dependientes de Sánchez, que probablemente dictaminará que la amnistía es constitucional, en contra de la comunis opinio de expertos constitucionalistas publicada en innumerables artículos de opinión.

La esperanza de muchos de que la mayoría de los socialistas se volvieran en contra del rumbo (auto)destructor del PSOE, o sea dentro del partido o de forma más visible, tampoco se ha cumplido. Los arquitectos de la democracia española, como Felipe González, que casi habían alcanzado el estatus de leyenda, son percibidos por los simpatizantes actuales del PSOE como dinosaurios políticos de otra época, cansinamente ridiculizados y sin ninguna

influencia política significativa. El venerable Partido Socialista Obrero, con más de 100 años de existencia, aparece como un aparato de apoyo sin voluntad ni posición, completamente supeditado a su líder Pedro Sánchez y despojado de facto de sus estructuras federales (formalmente existentes) - dado que ya no hay contrapesos visibles dentro del partido.

Está por ver si Europa puede detener este preocupante proceso, como también esperan muchos en el PP. Según el derecho constitucional, el conflicto regional catalán es y sigue siendo un conflicto territorial interno en España, aunque los separatistas catalanes han intentado repetidamente internacionalizar su causa y conseguir apoyo europeo para sus objetivos durante la última década. Ahora el PP quiere llevar los acontecimientos a Europa con la esperanza de que la UE investigue e intente impedir cualquier violación del Estado de Derecho por parte de Sánchez a nivel nacional, de forma similar a Polonia y Hungría. Debido a la complejidad de la situación, será importante que el PP sea capaz de explicar siempre a los observadores en Bruselas la diferencia entre el asunto interno del conflicto regional y la revisión legítima por parte de la UE de cualquier violación del Estado de Derecho por parte del Gobierno nacional.

Como nos ha recordado recientemente Anne Applebaum, no debemos perder de vista que el movimiento separatista en torno a Junts per Catalunya y Puigdemont estaba manifiestamente vinculado al régimen de Putin en Rusia y que Rusia tiene un interés estratégico esencial en **la independencia de Cataluña, que daría a Putin una influencia histórica sin precedentes en el sur y el oeste de Europa y en el Mediterráneo.**

Los autores de este informe sostienen que ahora hay "tres Españas" en lugar de "dos". Además de los conflictos históricos del país, Sánchez ha estilizado la disputa actual como un conflicto dicotómico entre "el progreso o la derecha". Una flagrante simplificación populista de la realidad. **La inmensa mayoría de los españoles están en el centro**, cansados de la polarización constante. Quieren una política constructiva para todos los españoles y no unos pocos privilegiados. Incluso la mayoría de los catalanes, incluso muchos en el partido Junts, quieren una convivencia próspera en reconocimiento de su singularidad lingüística y cultural, ya ampliamente reconocida y desarrollada en España.

La paradoja actual en España es que una minoría está actuando contra la voluntad política de una mayoría hasta ahora silenciosa que no está a favor ni de la amnistía ni de la separación de partes del país. Sin embargo, es evidente que esta mayoría ya no está dispuesta a permanecer en silencio. Existe el peligro de que en España también se produzcan acontecimientos al estilo Ziblat/ Levitsky, que debiliten la democracia desde dentro, incluso a través de las elecciones. Los expertos en América Latina ven sorprendentes paralelismos en el enfoque de Pedro Sánchez con los **sistemas autoritarios de la izquierda bolivariana**, como en Venezuela, donde las instituciones fueron sucesivamente tomadas por los políticos y donde la democracia fue "reinterpretada".

Si, como es de esperar, los separatistas (principalmente Junts, ERC y EH Bildu) continúan con su línea pública de independencia incondicional de Cataluña y el País Vasco con todas sus fuerzas y utilizan el recrudescimiento del debate en su beneficio, el Estado español lo tendría mucho más difícil para frenar el impulso esta vez que en 2017. Esto se debe a que el Gobierno de Sánchez **ha suprimido en los últimos años la ley de sedición**, ha facilitado la malversación de fondos públicos con fines políticos ("corrupción política") y ha trasladado otras competencias asimétricas a las regiones del norte, permitiéndoles actuar con mucha más libertad. Por ende, el Estado español carece ahora de algunos de los instrumentos de contención decisivos del Estado de Derecho de entonces.

El ganador de las elecciones y presidente del PP, Feijóo, había ofrecido a Sánchez seis pactos de Estado PP-PSOE para organizar las reformas que se necesitan urgentemente en los ámbitos de la economía, los asuntos sociales, la seguridad, la política exterior y también el orden territorial al margen de extremistas y fundamentalistas. Feijóo llegó a ofrecer la

alternancia en el liderazgo del Gobierno entre él y Sánchez para la próxima legislatura. Un **acercamiento entre los grandes partidos centristas**, que en las últimas elecciones volvieron a ser capaces de aglutinar más del 60% de los votos, en contra de las tendencias de fragmentación de muchos países europeos. A pesar de eso, probablemente sólo será posible en el periodo "después de Sánchez". Esperemos que el país, que en realidad tiene tanto potencial, no sufra demasiado daño mientras tanto, ni interna ni externamente.

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Dr. Ludger Gruber
Representante
Oficina España y Portugal
www.kas.de

ludger.gruber@kas.de



The text of this work is licensed under the terms of "Creative Commons Attribution-ShareAlike same conditions 4.0 international", CC BY-SA 4.0 (available at: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.com>)